

¿El agotamiento de un ciclo?

Eduardo Ballón E.

Sumilla

El país está viviendo grandes turbulencias que hacen de este tiempo el más intenso e incierto del siglo. La confluencia de distintas crisis que vienen desde atrás, el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la pobre gestión de la pandemia desde inicios del 2020, incrementaron los malestares y las demandas fragmentadas de sectores mayoritarios de la sociedad, a la par que evidenciaron que nuestro Estado es débil, ineficiente, clientelar y corrupto.

Entre julio del 2020 y julio de este año hemos asistido al cambio de tres presidentes, la instalación de cuatro gabinetes, la negación de investidura a un primer ministro por primera vez en nuestra historia, un proceso electoral con 18 candidatos, la manifestación de la mayor desafección política en las elecciones congresales de este siglo, así como a una segunda vuelta electoral con una campaña en la que el fujimorismo y la derecha en conjunto empujaron una fuerte polarización entre el riesgo del comunismo y la supuesta defensa de una democracia sin contenido, de un orden económico y de un poder excluyente y discriminador en realidad.

El triunfo de Castillo constituyó un resultado histórico que rompe el patrón tradicional. Un maestro, rondero, sindicalista, provinciano y serrano gana la elección y derrota al poder constituido; contra todo y contra todos, estableciendo un hito que cambia nuestra historia, instalando un gobierno claramente plebeyo, sin vínculos con las élites ni la clase política tradicional y resistido por los medios de comunicación, que intentan su demolición desde el 7 de junio. Al frente, una derecha que fracasó en el gobierno de lujo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el Ejecutivo y Fuerza Popular en el Congreso, instalada significativamente hoy día en posturas conservadoras extremas, discriminadoras y fuertemente antidemocráticas. Y si bien el agotamiento de un ciclo en nuestra historia es innegable, no basta para asegurar su cancelación.

Como hemos sostenido en otro texto¹, el país está viviendo grandes turbulencias que hacen de este tiempo el más intenso e incierto del presente siglo. La confluencia de distintas crisis que vienen desde atrás, el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la pobre gestión de la pandemia en la que nos encontramos desde inicios del 2020², incrementaron los malestares y las demandas fragmentadas de sectores mayoritarios de la sociedad, a la par que evidenciaron que nuestro Estado es desde siempre débil, ineficiente, clientelar y corrupto, con instituciones pobres e incapaz de responder a los intereses generales de la ciudadanía.

En un escenario fuertemente marcado por la mal llamada «informalidad» (72.4% de la Población Económicamente Activa -PEA- el 2018, 95.6% en el ámbito rural), por las distintas desigualdades resultantes de nuestra estructura social excluyente y el centralismo que caracteriza nuestra historia, así como por el derrumbe de nuestro limitado patrón de cohesión social y el descrédito de la política, la sociedad amenaza con

¹ Ballón, Eduardo. «El año que vivimos en peligro». En: **desco**, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. A ritmo de pandemia y cuarentena*. Lima: **desco**, 2020. Ver en: bit.ly/3yVw0tO

² Sobre el particular, ver: Asensio, Raúl (ed.). *Crónica del gran encierro. Pensando el Perú en tiempos de pandemia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2020 (bit.ly/3ngdSs2). Ver también: Jochamowitz, Luis y León, Rafaella. *Días contados. Lucha, derrota y resistencia del Perú en pandemia*. Lima: Planeta, 2021.

desplomarse porque las estrategias fuertemente generalizadas de «desformalización»³ de las relaciones en ella (sociales, políticas, económicas y culturales), entiéndase informalidad económica, desborde social y achichamiento cultural, que antes que un problema para muchos sectores en el país fueron una solución dentro del orden neoliberal, se mostraron también agotadas en el contexto de la pandemia.

El enfrentamiento Ejecutivo-Congreso y la caída de Vizcarra

En ese marco, a mediados de julio del 2020, el gabinete ministerial que presidía Vicente Zeballos fue renovado en medio del estado de emergencia resultante de la pandemia del coronavirus, que llevaba entonces más de 12 000 fallecidos, cerca de 340 000 contagiados y provocado una grave crisis económica y de desempleo. Zeballos dejó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras 10 meses de gestión, en donde perdió dos ministros (Cultura, por la contratación de Richard Swing, e Interior, por presunta corrupción en compras públicas en la Policía), enfrentó distintos cuestionamientos (el Colegio Médico pidió la renuncia del titular de salud en mayo, la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue cuestionada por los retrasos en los bonos a las familias vulnerables, la ministra de Trabajo fue denunciada por los abusos con la suspensión laboral perfecta, el titular de Justicia lo fue por los motines en distintos penales) y se enfrentó continuamente con el Congreso que buscaba interpelar a seis miembros de su gabinete. En ese escenario de debilidad del Ejecutivo, la aprobación presidencial (65%), aunque era llamativa, ya había perdido 22 puntos desde marzo⁴.

³ Sobre el particular, ver: Martuccelli, Danilo. *La sociedad desformal. El Perú y sus encrucijadas*. Sao Paulo: Plataforma Democrática, 2021. En: bit.ly/3h63eAg

⁴ Ipsos. *Opinión Data - Julio 2020*. Lima: Ipsos, 2020. En: <https://bit.ly/3BLIUNN>

Como parte de las disputas entre los dos principales poderes del Estado, en menos de 15 días (entre julio y agosto) asistimos por primera vez en la historia a la negación de confianza de un primer ministro, del gabinete Cateriano, y a la formación de uno nuevo, presidido por el hasta entonces ministro de Defensa, general Walter Martos. El abrumador voto obtenido por Martos (115 votos a favor), apenas una semana después del rechazo al primero, estaba cantado. Cateriano cayó por una combinación de factores que iban más allá de la acción de un grupo de congresistas interesados en «castigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)» y al ministro de Educación por afectar los intereses privados que representan. No siendo un tema menor, como tampoco lo fue el estilo arrogante y soberbio que mostrara el premier de ese momento, confluyeron el malestar del interior del país por la sensación de abandono del gobierno nacional (62 de los parlamentarios provincianos votaron en contra de la aprobación), las críticas a la minería y más ampliamente el rechazo al modelo económico de algunas de las bancadas⁵. Intentar negar esa realidad, como lo hizo Vizcarra, así como la mayoría de medios de comunicación en un primer momento, apuntaba a cargar las tintas contra un Congreso fragmentado, desordenado y tan pragmático como el propio presidente. No obstante los cambios, la autocrítica siguió ausente en el Ejecutivo y su carencia de una estrategia clara en materia de salud y saneamiento se hizo evidente, como lo ratificaron los números y el virtual colapso de nuestro sistema de salud; como fue obvio también la mucha insistencia en la reactivación económica, que no se dio, y la muy poca luz sobre los bonos y el apoyo a la gente.

En septiembre el Congreso votó sin éxito la vacancia del mandatario a partir de varios audios que lo comprometían estructurando su defensa con sus funcionarios para responder

⁵ OjoPúblico. «Lobbies, fragmentación y agendas regionales pendientes detrás de la caída del Gabinete». *ojo-publico.com*, Lima, 5 de agosto del 2020. En: bit.ly/3BQhAN5

ante la Fiscalía y el Congreso por el caso Swing. La opinión pública, frente al hecho, consideraba mayoritariamente (79%) que debía concluir su mandato, aunque un porcentaje similar (78%) entendía que se trataba de una conducta incorrecta, grave o muy grave⁶. Un mes después, el segundo pedido de vacancia se presentó con distinta suerte. La investigación de la Fiscalía sobre presuntos pagos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua fue el hecho esgrimido para argumentar la incapacidad moral.

Los distintos «pequeños intereses» –los negocios de las universidades «bamba», garantizar la impunidad parlamentaria, frenar la lucha contra la corrupción y los juicios de *Lava Jato*– abrieron un nuevo capítulo de una crisis de largo recorrido. Desde distintos frentes se construyó el escenario que terminó con la gestión de Vizcarra. Confluyeron desde agrupaciones políticas con intereses particulares y de corto plazo, en un Congreso donde cerca de 70 de sus integrantes tenían historia judicial, hasta sectores del Ministerio Público interesados en «asegurarse», quienes siguieron una práctica tan instituida como condenable, filtrando a los medios la información necesaria. Con ellos, el llamado «Club de la construcción», la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y los principales gremios empresariales, interesados en bloquear los juicios como parte de los pasos que les urgían para recuperar su poder, así como buena parte de los medios de comunicación⁷.

Como era previsible, la decisión generó una ola de indignación y protesta contra una de las instituciones más criticadas y resistidas los últimos años. La presencia espontánea de grupos de manifestantes en las calles y los pronunciamientos de

⁶ Ipsos. *Informe de opinión. La crisis política*. Lima: Ipsos, 2020. En: bit.ly/3n7wzfD

⁷ Martuccelli, Danilo. *La sociedad desformal. El Perú y sus encrucijadas*. Sao Paulo: Plataforma Democrática, 2021. En: bit.ly/3h63eAg. Ahí se subraya la heterogeneidad de la coalición golpista que compartía intereses claramente «negativos».

distintas organizaciones de la sociedad civil fueron inmediatos y coincidentes en la condena y en la expresión de los temores que produce una institución que actúa irresponsablemente. La elección de Manuel Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, como Presidente de la República, y la composición del gabinete de Antero Flores Araoz, terminaron de encender la calle, pues la designación de Merino fue vista por un amplio sector de la ciudadanía como un golpe de Estado. 88% estuvo en desacuerdo con la vacancia de Vizcarra, 94% en contra de la designación de Merino, mientras la desaprobación del Congreso llegó al 88%, su punto más alto desde el 2016⁸.

Las movilizaciones de noviembre y diciembre y el gobierno de Sagasti

La masividad y la fuerza de la protesta en las calles terminaron con el gobierno de Merino y Flores Araoz. Dos muertos, más de 120 heridos y varios desaparecidos iniciales evidenciaron la brutal respuesta del Gobierno y la Policía. La opinión pública rápidamente «empató» con una movilización que representó un cambio significativo frente a la dinámica anterior. 86% declararon su apoyo a las marchas y 13% dijeron haber participado en las mismas, según las encuestas de Ipsos. Sobre las movilizaciones, estas tuvieron algunos rasgos importantes que conviene resaltar.

En principio, la protesta fue mayoritariamente joven y autoconvocada por distintos colectivos⁹ que no se proponían la defensa del presidente, pero que rechazaban con fuerza

⁸ Ipsos. *Opinión Data - Noviembre 2020*. Lima: Ipsos, 2020. Ver en: bit.ly/3hb2OsG

⁹ Sobre el particular, ver: Villanueva, Eduardo. *Rápido, violento y muy cercano. Las movilizaciones de noviembre de 2020 y el futuro de la política digital*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2021. En dicho texto, el autor diferencia tres grupos de jóvenes: los activistas dedicados a causas sociales, los grupos movilizadores a la manera de barras de equipos de fútbol y los espontáneos (grupos de barrio o de amigos).

el disfraz de legalidad del golpe de una coalición mafiosa y conservadora. Las movilizaciones, que carecieron de un centro y una conducción clara, fueron descentralizadas, desconcentradas y significativamente mesocráticas, teniendo múltiples escenarios y formas: marchas de distinta índole en las calles, fuerte actividad y convocatoria en las redes sociales, cacerolazos, pintas y múltiples formas de expresión convergieron con fuerza e intensidad. La oposición formal al golpe –partidos, sindicatos y autoridades locales– fue muy débil y más declarativa que real. Por un lado estuvieron los partidos, temerosos con razón de ser rechazados, mientras por otro las organizaciones sindicales que convocaron a una movilización propia y tardía.

La protesta fue poco ideológica, con una demanda transversal muy clara: fuera Merino y la corrupción, potenciada por un repertorio muy amplio de acciones sociales y expresando malestar y desagrado antes que una agenda concreta. Siendo fundamentalmente pacífica, la movilización reivindicó con fuerza su derecho a la calle, mostrándose capaz de «organizarse» rápidamente para responder a la brutal respuesta policial que aceleró la pronta «huida» de varios ministros y la rápida caída de Merino. Aunque la dispersión en la protesta fue notoria, distintas voces que interpretaron una confluencia «ciudadana» en defensa de la democracia obviaban la fuerza del rechazo a la clase política y algunas consignas –una nueva constitución, por ejemplo– que suponen una demanda por transformaciones radicales, evidenciando el desgaste de una hegemonía cada vez más resquebrajada¹⁰.

¹⁰ De las distintas lecturas y primeras interpretaciones de las protestas de noviembre, dos de ellas, desde distinta perspectiva, resultan particularmente agudas. Mientras Martuccelli encuentra una reacción ciudadana contra las opacidades políticas propias de la sociedad desformal, Mijail Mitrovic, en un texto publicado en *Mañana*, junto a un ensayo fotográfico de Musuk Nolte (ver en: bit.ly/3lh7A9l), encuentra brechas e hilos conductores entre la indignación y las demandas sin programa común

En ese contexto, tras distintas marchas y contramarchas, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como su presidente y, por lo tanto, como mandatario transitorio del país en una derrota parcial de los sectores más conservadores y de la coalición que vacó a Vizcarra. Su gabinete, de claro corte tecnocrático y con relativa experiencia en la gestión pública, se instaló con un discurso democrático y de «buenas maneras» llamando a la «unidad y al diálogo nacional». Manteniendo un compromiso con el modelo y la política económica de las últimas décadas –el ministro de Economía fue quien presidió el Consejo Fiscal los años anteriores–, y falto de experiencia política, su supervivencia se entiende por la claridad que tuvo su agenda básica que priorizó tres puntos: (i) garantizar elecciones democráticas libres y transparentes en la fecha convocada; (ii) atender la pandemia asegurando el acceso eficiente y justo a la vacuna; y (iii) avanzar en la reactivación económica atendiendo las urgencias de la pequeña agricultura y la agricultura familiar para garantizar la alimentación. A partir de dicha agenda, y no obstante sus propios errores y algunos conflictos sociales de envergadura –los trabajadores de la agroexportación–, pudo resistir su enfrentamiento con el Legislativo y los sectores más conservadores que se mantuvieron hasta el final de su gestión.

El proceso electoral y los resultados de la primera vuelta

Las elecciones se organizaron en un contexto difícil. No obstante su solidez macroeconómica, el Perú fue de los países más afectados por la crisis de la pandemia. El escenario inmediato es complejo, pero menos malo de lo que se pensaba hasta el último trimestre del 2020. El Banco Central de Reserva del Perú estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo el 2020 hasta en -11.1%, con un déficit

de noviembre, y las luchas contra la agroexplotación de diciembre, que avanzan hacia un reconocimiento de derechos laborales mínimos.

fiscal del 8.9% del PBI, el nivel más alto desde 1990. Este resultado estuvo determinado tanto por las medidas transitorias de gastos e ingresos para enfrentar la pandemia de COVID-19, así como por el efecto del menor nivel de actividad económica en los ingresos. La inversión privada cayó 17.2 por ciento. La recesión producto de la COVID-19, terminado el 2020, solo parecía comparable a la que ocurrió durante la hiperinflación de fines de los años 80 del siglo XX. Basta con decir que al final de ese año la pobreza alcanzó al 30% de la población¹¹.

El proceso electoral fue inevitablemente corto. Menos de tres meses, atravesados por una pandemia que siguió pareciendo incontrolable y que configuraba un escenario de muerte y sufrimiento. Al desinterés y a la desconfianza que producía una elección con 18 candidatos presidenciales y 19 listas congresales, los más de ellos desconectados de la gente y sus necesidades, se sumó una campaña altisonante, prácticamente vacía de contenidos y llena de ofertas y anuncios fantasiosos en los que cayeron la mayoría de aspirantes para beneplácito de muchos medios de comunicación, interesados en el *rating* y la venta antes que en la información y la promoción del debate.

Con este escenario no sorprendió que el ausentismo, 29.95%, fuera el más alto de este siglo, superando por más de 10 puntos al del 2016, no obstante el esfuerzo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que, hay que reconocer, más allá de errores puntuales como el horario de votación para la población vulnerable, logró sacar adelante el proceso con relativo éxito. Tampoco debe sorprender la suma también alta de votos blancos y nulos (17.5%), lo que evidenció que más del 46% del padrón expresó su desconfianza en la variopinta oferta electoral y en que desde aquella haya voluntad e interés por cambiar las cosas. El ausentismo fue especialmente significativo en varias

¹¹ Lavado, Pablo y Liendo, César. «COVID-19, pobreza monetaria y desigualdad». *focoeconomico.org*, 29 de mayo del 2020. Ver en: bit.ly/3DWuhb2

regiones (Loreto 40%, Cajamarca 38%, Pasco 36%, Ucayali 34% y Piura 33%), como lo fueron los votos viciados y nulos en otras tantas (San Martín 28%, Amazonas y Huancavelica 27%, Huánuco 26%, Loreto 25%, Apurímac y Cajamarca 24%), subrayando el tono nacional de distancia frente a las elecciones.

Aunque la victoria de Pedro Castillo en la primera vuelta (18.9%) sobre Keiko Fujimori (13.4%) fue «leída» con sorpresa, las encuestas la insinuaban desde la segunda quincena de marzo. El mapa electoral resultante fue muy similar al que se dio el 2006. Lima - Callao y parte de la Costa moderna votando por el modelo y el mercado, mientras la Sierra, desde Cajamarca hasta Puno, el Sur y el Centro, íntegros, haciéndolo por el cambio y por mayor presencia del Estado. Perú Libre ganó en 137 provincias, mientras Fuerza Popular lo hizo apenas en 40, triunfando en las restantes otras cinco agrupaciones.

Como tendencia general, Perú Libre y Castillo ganaron en los territorios más pobres. 46 de los 50 distritos con mayor pobreza monetaria y los diez distritos con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo, haciendo lo propio en 17 de las 25 provincias con menor Índice de Densidad del Estado (IDE). En sentido estricto, los resultados territoriales se asentaron sobre las múltiples polarizaciones que se producen en los escenarios regionales y locales. Las más evidentes: el malestar generalizado con el Estado, los políticos y su manera de hacer política; la distancia entre Lima y las regiones, especialmente del Centro y Sur del país; las desigualdades entre la capital y el interior, como las distancias entre las capitales departamentales y el resto de sus espacios; así como el descontento con los servicios públicos que se incrementaron groseramente en la pandemia. Todo ello se observa claramente en los resultados electorales.

Es así que el resultado de abril mostró algunos cambios significativos en el mapa electoral. Dentro de ellos: (i) la desaparición del centro político (el partido Morado se redujo a su mínima

expresión y Victoria Nacional se licuó); (ii) el surgimiento de un bloque de derecha radicalmente conservador, cuyas figuras más visibles fueron Renovación Nacional y su candidato López Aliaga (expresando una voluntad clara de cortar libertades y derechos, así como una alianza con los mayores fundamentalismos religiosos, lo que arrastró a otras agrupaciones de derecha significativas –Fuerza Popular y Avanza País– a enfatizar su conservadurismo)¹²; (iii) la derrota y retroceso de las organizaciones que afirmaron el respeto de los derechos y libertades, proponiendo incluso su ampliación (la suma de estas fuerzas –Juntos por el Perú, Partido Morado, Victoria Nacional y Frente Amplio– apenas llegó al 15.6% de los votos válidos); y (iv) también perdieron importantes sectores de la sociedad civil organizados y movilizados alrededor de los derechos y las libertades.

El giro conservador que mostraron los resultados es significativo. Como fue notorio, Perú Libre comparte esas posiciones por lo menos en materia de enfoque de género, centralidad de la familia, violencia contra la mujer, aborto y un largo etcétera. Al hacerlo, expresa la mirada y la distancia que tienen sectores significativos del mundo popular, urbano y, especialmente, rural, en estas materias. El ascenso de la derecha más conservadora, particularmente en Lima, donde sumados alcanzaron más del 43% de los votos válidos, incorpora al escenario político la figura de López Aliaga, quien disputó con éxito el mundo popular que el fujimorismo mantuvo a lo largo de los años. Así, lo superó en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas y San Martín de Porras, por señalar algunos.

La primera vuelta consagró también la elección de un Congreso fragmentado en diez bancadas, donde Perú Libre (con 37 congresistas) es la primera minoría, seguido por Fuerza Popular (24), Acción Popular (17), Alianza Para el Progreso (15),

¹² Sumadas estas tres organizaciones que tienen vínculos de larga duración con el fujimorismo, alcanzan el 36.6% de la votación.

Renovación Popular (13), Avanza País (7), Podemos y Juntos por el Perú (5 cada uno), Somos Perú (4) y el Partido Morado (3). Se trata de un Congreso donde el nivel de representación del partido elegido como primera minoría sobre la base de votos emitidos llega apenas al 9.73%. 47% de los congresistas se inscribieron a fines del 2020 en el partido por el que postularon y 28% no son afiliados al mismo (49% y 40%, en el caso de PL, y 84% y 8% en el de Fuerza Popular). 21% registró haber postulado antes por otro partido¹³. Añadamos a esto que 78% del total carece de experiencia en cargos altos de gestión pública y que apenas 15% conoce algo del trabajo parlamentario, mientras que 11 de los representantes elegidos tiene antecedentes civiles y penales, y 4 cuentan con investigaciones. En otras palabras, resultaría ingenuo esperar importantes «lealtades» y «disciplinas» partidarias en una representación significativamente marcada por intereses personales y de pequeños grupos. Una representación que repite y amplía los límites y vicios de las anteriores.

La segunda vuelta y el invento del fraude

La segunda vuelta electoral se polarizó rápidamente por la estrategia de Keiko Fujimori, quien desde el primer momento apostó por la ideologización de su campaña –la combinación de «terruqueo», anticomunismo y promesas de reparto–, dejando de lado el discurso tradicionalmente tecnocrático de la derecha, que buscó mantener en la primera vuelta. Castillo, por su lado, parecía convencido de que podía ganar con el mismo tono y registro que usó en la primera vuelta, apelando al factor identitario, resolviendo sus distancias con la agrupación que lo cobijaba y precisando sus principales medidas de gobierno y su distancia de la corrupción.

¹³ Hidalgo, Martín. *Congresopedia. Veinte años de un sistema parlamentario fallido*. Lima: Planeta, 2021.

La segunda vuelta dejó de lado el ineludible debate de cómo enfrentar la pandemia y la situación sanitaria del país, y sus efectos económicos y laborales, por señalar apenas las dos primeras urgencias que deberá enfrentar el futuro gobierno, cualquiera que fuere. El centro de la disputa que impuso la derecha fue la que opone comunismo y democracia, como si el primero fuera realmente un riesgo que corre el país y la segunda estuviera llena de contenido y atenta a las necesidades de la gente. Una polarización que no ayudaba al debate y golpeó a nuestra exánime democracia, donde la mayoría de los medios de comunicación de masas y buena parte de las redes sociales devinieron en tóxicas.

El fujimorismo y la derecha toda, con la bendición de Mario Vargas Llosa, pensaron que el futuro era la restauración y terminaron de instalar una polarización fuertemente racista y discriminadora con crecientes indicios de violencia que no se habían visto antes en campaña electoral alguna.

La victoria final de Castillo fue un resultado electoral histórico que supone una ruptura en el patrón tradicional del país. Un maestro, rontero, sindicalista, provinciano y serrano gana la elección y derrota al poder constituido; contra todo y contra todos, estableciendo un hito que cambia la historia del país, instalando un gobierno claramente plebeyo. Sin vínculos con las élites ni la clase política tradicional, sobre todo limeña, resistido por los grandes medios de comunicación de masas –en especial el Grupo El Comercio– que, con contadas excepciones, intentaron su demolición desde el 7 de junio.

El profesor ganó la segunda vuelta usando las palancas que tuvo en la primera ronda –el factor identitario, su condición de *outsider*, el aparato y la cierta capacidad electoral de Perú Libre¹⁴,

¹⁴ Partido regional de Junín fundado el 2007 como Perú Libertario, que se convirtió en agrupación nacional desde el 2012 y cambió su nombre al actual el 2019. Con un perfil propio de la izquierda marxista de los 70, desde un primer momento buscó organizarse desde Junín, creciendo hacia Huancavelica y provincias de Apurímac y Cusco. En las

el movimiento de docentes que lideró el 2017 que se convirtió en su primer y principal aparato de campaña, las redes chotanas que se organizaron desde la primera vuelta y que le dieron desde temprano su soporte personal básico, entre otros-, a las que se sumaron el respaldo de Juntos por el Perú - Nuevo Perú, mediante el único acuerdo institucional que él suscribió, así como el del Frente Amplio. Aunque su victoria fue territorialmente arrasadora¹⁵, electoralmente obtuvo un triunfo ajustado que posibilitó la campaña inmediatamente instalada por el fujimorismo y el conjunto de la derecha.

Aquella esgrimió cotidianamente nuevas fantasías. De las acusaciones de indicios de fraude con los que empezaron la noche misma de los resultados, pasaron en horas a la denuncia de un fraude sistemático. Argumentaron que Perú Libre había impugnado las actas donde Fuerza Popular tenía votaciones altas, denunciaron el contenido de las charlas de capacitación a sus contrincantes, encontraron «imposibles estadísticos» en las mesas donde no tuvieron votos, «descubrieron» familias completas instaladas en mesas electorales, hallaron muertos votando y firmas falsificadas... pero nunca presentaron pruebas. Simultáneamente, intentaron ocupar las calles y aumentar la presión sobre las autoridades electorales –incluyendo la «declinación» de Arce Córdova–, como

elecciones del 2010 ganó el Gobierno Regional de Junín, el 2018 reeditó ese triunfo y ganó además cinco provincias y 29 distritos. Habiendo participado en las elecciones nacionales del 2016 –finalmente se retiraron–, así como en las parlamentarias del 2020, donde obtuvieron el 3.40% de los votos, además de acumular experiencia y desarrollar un pequeño aparato con capacidad electoral, hicieron conocido su símbolo electoral, un lápiz, que empataba con el maestro candidato.

¹⁵ De acuerdo a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Perú Libre triunfó en 16 de 25 regiones, 153 de 196 provincias y en 1496 de 1874 distritos. Castillo venció en los 10 distritos más pobres, mientras Fujimori lo hizo en 9 de los 10 más ricos. Castillo triunfó en 837 de los 914 distritos con comunidades indígenas. En cinco regiones del centro sur obtuvo más del 80% de los votos –Puno, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac –; en otras cuatro regiones, tres del Sur, más del 70% –Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Cajamarca–; mientras que en Pasco y Arequipa estuvo sobre el 60%.

parte de una campaña que se fue llenando de agresividad verbal y discriminación racista contra Pedro Castillo y sus electores.

Los más tercos persistieron exigiendo revisar el padrón electoral¹⁶, invocando a la criptología o convocando directamente a una auditoría internacional. Más grave aún, empezaron a alentar un golpe de Estado. Movilizaron a militares retirados para presionar a las Fuerzas Armadas y pretendieron presentarse como los salvadores de la patria. Algunos de ellos sacaron a las calles a grupos violentos y buscaron amedrentar y agredir a distintas autoridades del proceso electoral, cruzando líneas rojas elementales que obligaron a Fujimori a tomar distancia de las peligrosas y constantes incitaciones a la violencia de López Aliaga y su movimiento, que rápidamente buscaron asumir el liderazgo de la derecha y desplazar a Keiko Fujimori y sus seguidores.

La derrota de Keiko Fujimori fue la de su asentamiento en las burguesías urbanas de las grandes ciudades y en la de los sectores medios ligadas a ellas, en un escenario en el que el pueblo aglutinado alrededor de Alberto Fujimori 30 años atrás apareció disgregado, en una elección donde el neoliberalismo, la derecha en su conjunto, tuvo muy poco para ofrecerles a las masas empobrecidas y más directamente afectadas por la pandemia. Su capacidad futura de articular a las derechas está ahora, como nunca antes, entre interrogantes y además de López Aliaga aparecen varios competidores y competidoras en un universo más fragmentado que el de la izquierda. Fragmentación que ciertamente alcanza al mundo gremial empresarial, tema sobre el que se ha dicho muy poco¹⁷.

¹⁶ De Althaus, Jaime. «No solo ser, sino parecer imparcial». *El Comercio*, Lima, 25 de junio del 2021. Ver en: bit.ly/38OG39m

¹⁷ Sobre el particular, ver: OjoPúblico. «Gremios empresariales forman nueva coalición luego de discrepancias con CONFIEP». *ojo-publico.com*, Lima, 19 de julio del 2021. Ver en: bit.ly/3zUp2WW

11 organizaciones empresariales formaron en junio la Unión de Gremios del Perú para actuar como una alianza paralela a la Confiep porque no se sienten representados por esta y por discrepancias políticas. Algunas de las organizaciones integrantes de este nuevo grupo son la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) y la Sociedad Nacional de Industrias. A fines de junio, los integrantes de este nuevo bloque ya se habían pronunciado de manera colectiva contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), calificando de restrictivas las fechas y horarios fijados por el organismo electoral para recibir los masivos pedidos de nulidad de los resultados electorales de mesas de votación impulsados por Keiko Fujimori.

En ese escenario, desde distintos espacios del desaparecido centro político pero también desde la derecha liberal, se generaron algunos acercamientos a Castillo, mientras que diversos analistas, periodistas e intelectuales liberales, o directamente de centro derecha, enfrentaron a los distintos discursos sobre el fraude, carentes de sustancia y crecientemente impulsores de una primitiva alianza anticomunista de toda la derecha nacional -inicialmente soñada por la denominada Coordinadora Republicana-, con respaldo internacional (Fundación Liberal, VOX, Vargas Llosa, disidencia castrista de Miami, ultraderecha católica y evangélica, grupos confesionales), quienes no dudaron en alentar incluso el golpe de Estado.

Un futuro difícil y complejo

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de julio del 2021¹⁸ mostraba que no obstante la sostenida campaña en su

¹⁸ Instituto de Estudios Peruanos (IEP). *Informe de opinión - Julio 2021*. Lima: IEP, 2021. Ver en: bit.ly/3jQrOHh

contra, la opinión pública favorecía al nuevo presidente y no a los otros actores de la escena, incluido un apoyo al nuevo partido de gobierno. Castillo emergió de la demolición a la que fue sometido con 53% de aprobación, sin la confianza de la elite, mostrando un abismo electoral donde su aprobación en Lima era 40%, fuera de Lima 59% y en el Perú rural 68%, evidenciando que la estrategia de la deslegitimación –y retraso de su proclamación– solo tuvo un efecto relativo. Otros datos indicaban que solo uno de cuatro peruanos creía que hubo fraude, llegando a un tercio en Lima; ese relato naufragaba en las regiones y se localizaba en un sector de la derecha (39%) y en poco más de la mitad de los votantes fujimoristas (54%). Los que creían que Castillo es democrático (45%) eran más que los que lo veían autoritario (31%). La encuesta mostraba que los peruanos se imaginaban un gobierno de Castillo desde la esperanza y la incertidumbre (34% y 16%, respectivamente) antes que desde el miedo (15%).

No obstante, la misma encuesta mostraba que la confianza en la futura administración era baja (16%), señal de que no habría cheque en blanco. Tales resultados revelaban que el nuevo presidente iba a encontrar un panorama muy complicado: una alta expectativa y presumiblemente varias y distintas demandas de quienes votaron por él, y una sensación de incertidumbre de todos. La gente agobiada y desgastada de los sostenidos enfrentamientos de los últimos meses, parecía, a fines de julio, más interesada en resolver sus retos diarios –vacunación y salud, empleo y reactivación económica, acceso a servicios y reconocimiento– que en mantenerse en la polarización acicateada desde la derecha.

Y si bien el agotamiento de un ciclo en nuestra historia es innegable, no basta para asegurar su cancelación. Se percibe claramente la precariedad de los actores políticos, la fragilidad de agencia de la sociedad y el hartazgo de la gente que cree que los políticos siempre encuentran la manera de proteger sus privilegios. La población piensa que a la élite económica y política no le interesa

la gente que trabaja, percibe que la división más importante en nuestra sociedad es la que existe entre la gente y las élites políticas y económicas, y siente que los especialistas no entienden la vida de quienes no son especialistas¹⁹. Lo que es innegable, sin embargo, es que entramos a otro momento marcado por la incertidumbre, pero donde la restauración que pretenden algunos en el país parece muy difícil, pudiendo esta incluso conducirnos al abismo.

¹⁹ Sobre el particular, ver: Ipsos Internacional. *Sentimiento de sistema roto en 2021. Populismo, Anti-elitismo y Nativismo. IPSOS Global Advisor-Encuesta de 25 países*. Lima: Ipsos Internacional. Ver en: bit.ly/2YEklmJ